

TRIBUNAL SUPREMO DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA

DERECHOS (VIOLACIÓN DE LA LEY EN LA DECISIÓN DE UN DICASTERIO ROMANO)

Sentencia de 29 de septiembre de 1989 (*)

SUMARIO

I. *Species facti*: 1-2. Erección de la Cofradía de N. Señora de Sonsoles, y construcción del hospicio. 3-4. Primer conflicto entre el párroco y la Cofradía, y petición al Papa para que confirme la decisión del juez de Avila que unía el Santuario al hospital perpetuamente. 5-6. La bula de Clemente VII y su doble contenido. Toma de posesión del Santuario por la Cofradía. 7-8. Exención de las tasas de la bula de Cruzada y uso pacífico de la bula clementina. 9-12. Decreto episcopal de 1981, recursos de la Cofradía, y decreto de la Congregación confirmando el del Obispo. II. *In Iure*: 13-14. Normas sobre Cofradías, y relación entre derecho común y privilegios. 15-16. Subsistencia del privilegio y la cuestión de su derogación. 17-18. Nombramiento del Rector de la Iglesia y división de los bienes de la Iglesia o Cofradía. III: *In facto*: 19. Valor de la bula clementina. 20-22. Violación de la ley especial en el procedimiento y en la decisión. 23-24. Acerca de la separación de la administración. 25. Sobre el libre nombramiento del Rector del Santuario por el Obispo. 26. Derecho de vigilancia, visita y examen de la administración de la Cofradía. 27-28. Los Estatutos de la Cofradía fueron aprobados por el Obispo hasta en 1969. 29. Al dubio se responde afirmativamente.

* La presente sentencia dirime una controversia que se inició hace ya cerca de quince años: el 14 de enero de 1976, el Vicepresidente del Patronato de Ntra. Sra. de Sonsoles se dirige al Obispado de Avila solicitando la compra de unos terrenos, propiedad de la Mitra de la diócesis de Avila y del Seminario diocesano. El Obispado, cumplidos los trámites canónicos, ofrece la posibilidad de adquirir los terrenos solicitados pero no para el Patronato sino para el Santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles. El Patronato no accede a ello alegando que el Santuario no tiene capacidad jurídica para poseer bienes y que el Patronato administra como propios tanto sus bienes como los del Santuario. Esto provocó que el Obispo de la diócesis, para clarificar el estatuto jurídico y la situación patrimonial del santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles y del Patronato del mismo nombre, iniciara el 25 de octubre de 1979 una serie de consultas y gestiones que culminaron con la publicación de un decreto el 14 de septiembre de 1981 (ver anexo I) por el que se procedía al nombramiento de un Rector del Santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles y se establecía «la separación entre los bienes pertenecientes a la Cofradía o Patronato de Ntra. Sra. de Sonsoles; de modo que sean administrados separadamente, a tenor del canon 717, 2.º: por el Rector del Santuario los de éste (c. 485), y por la Cofradía o Patronato los que a ella corresponden, salvas siempre las prescripciones del mismo Derecho Canónico a este respecto (cc. 1521-1528). A tal fin, se designa una Comisión del Obispado, que junto con la Directiva de la Cofradía estudiará el modo de llevar a cabo esta separación de bienes; de tal manera que, a más tardar, el día 1.º de enero de 1982 se abran los libros y contabilidad por separado».

SENTENCIA DEFINITIVA

IOANNE PAULO PP. II, Feliciter regnante, Pontificatus Dominationis suae anno XI, die 15 aprilis 1989, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em. mis ac Rev. mis D. nis PP. Achille Silvestrini, Praefecto, Bernardino Gantin, Petro Palazzini, Opilio Rossi, Alisio Dadaglio, D. Simone Lourdusamy, Eduardo Gagnon et Alphonso Maria Stickler, Ponente, in causa Abulen., inter recurrentem «Cofradía de N.S. de Sonsoles», repraesentatam per procuratorem, Adv. Richardum Romano, et resistentem, Congregationem pro Clericis, repraesentatam per procuratorem Adv. Conradum Bernardini; interveniente in causa Rev. mo P. Francisco Xaverio Urrutia, S.J., hanc tulit definitivam sententiam.

I. FACTI SPECIES

1. Sub finem saeculi XV, i.e. die 3 mensis maii anni 1480, Andreas Diaz cum aliis personis petivit a Vicario Generali dioecesis Abulensis, ad quam locus pertinebat, ut nomine Episcopi in parvo et semicollapso sacello (Ermita), Mariae Virgini sacro, Confraternitatem erigeret, quae sibi proponeret illum locum sacrum restaurare, amplificare, ornare, proventus administrare, ita ut cultus B.M. Virginis debito modo promoveretur. Haec Confraternitas de facto debito modo erecta est sub nomine «Nuestra Señora de Sonsoles».

El Patronato o Cofradía de Ntra. Sra. de Sonsoles, alegando que poseía unos determinados privilegios pontificios concedidos por Clemente VII en una bula del 24 de mayo de 1526 y que consideraba vulnerados por el decreto del obispo abulense, inició una larga serie de reclamaciones ante los tribunales eclesiásticos de Avila, Valladolid y Rota de la Nunciatura en Madrid (demandas del 19 y 24 de septiembre, 2, 17 y 28 de octubre de 1981, 1 de marzo, 30 de abril y 24 de junio de 1982) y civiles de Avila (decisiones del 20 de septiembre de 1982; 5 de febrero, 23 de junio y 10 de octubre de 1983) hasta que, finalmente, el 26 de noviembre de 1983 interpuso recurso ante la Congregación del Clero contra el Decreto dado por el Sr. Obispo de Avila dos años antes. La Congregación del Clero dio un decreto el 18 de julio de 1984 por el que se confirmaba básicamente la actuación del Sr. Obispo de Avila (ver anexo II). Interpuesto, nuevamente, recurso contencioso-administrativo el 18 de agosto de 1984 ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, ésta da la razón íntegramente a la Cofradía de Ntra. Sra. de Sonsoles en la actual sentencia.

La sentencia, magníficamente elaborada tanto en su parte histórica como en la aplicación de las normas canónicas pertinentes, recuerda un principio elemental: los privilegios concedidos por la Sede Apostólica, que estén en uso y no hayan sido revocados, permanen intactos a no ser que sean revocados expresamente por los cánones del CIC o por la autoridad competente que en este caso es el Romano Pontífice (cc. 4; 76-84). Dado que en este caso no consta dicha revocación, dicho privilegio sigue teniendo plena vigencia actual. Muy interesante es el análisis histórico y, sobre todo, el método aplicado para deducir la autenticidad del documento clave en este proceso (la bula citada de Clemente VII) «aunque no exista o no pueda hallarse ningún documento original del mismo o su registro ni en el Archivo de la Cofradía ni en el Vaticano» (n. 19). La misma sentencia indica a la Congregación y al Obispo de Avila el evidente camino a seguir si quieren modificar el privilegio pontificio aquí contenido: si el privilegio de la Cofradía realmente se hubiera vuelto perjudicial, y su uso por tanto fuera ilícito, el recurso a la Congregación para el Clero era la ocasión óptima para pedir al Sumo Pontífice la declaración de su cese o para advertirle del grave abuso del privilegio concedido por su predecesor (n. 27). Siguiendo estas orientaciones, el Sr. Obispo de Avila se dirigió el 7 de diciembre a la Congregación para el Clero para que ésta obtuviese del Sumo Pontífice, *ex gratia*, la abolición de los privilegios concedidos a la Cofradía en la Bula del 24 de mayo de 1526. La Congregación para el Clero (ver Anexo III) comunicó el 30 de noviembre de 1990 que el Sumo Pontífice había acogido parcialmente esta solicitud, establecien-

Socii Confraternitatis donationibus propriis et aliorum atque eleemosynis receptis terras aliaque immobilia circa sacelum emerunt idque novis constructionibus amplificaverunt et ita ex vetere sacello novum Sanctuarium exstruxerunt; quod a scriptoribus historiae localis enarratur, inter quos eminent Bartholomaeus Fernandez de Valencia, qui in opere «La Divina Serrana», inter annos 1675 et 1700 composito, rem accurate describit. Alter fons historicus est «Liber administrationis Ecclesiae et Confraternitatis» ab A. de Cianca et aliis ab anno 1578 conscriptus in quo, cum proventibus et expensis, etiam eorum obiecta et facta historica enarrantur.

Notandum est, quod in his et aliis documentis temporis sequentis nomina «Ermitta», «Hermitorium» pro vetere sacello foundationis adhibita, etiam in posterum indistincte cum et pro verbo «Sanctuarium» adhiberiungebant.

2. Mox cultus B.M.V. sub titulo «Nuestra Señora de Sonsoles» a Confraternitate in ecclesia promotus ita divulgabatur, ut non solum incolae civitatis Abulensis Sanctuarium frequentarent, sed etiam christifideles totius dioecesis, quinimmo etiam aliarum regionum finitimarum eam celebrarent. Ut peregrinis, inter quos multi erant pauperes et aegrotantes, melius provideri posset, confratres alias terras acquisiverunt, ubi anno 1500 hospitium vel nosocomium exstruxerunt his praesertim peregrinis destinatum. Omnes hae activitates cultus et christianae caritatis a Confraternitate exercitae praesertim eleemosynis in Sanctuario oblatis sustentabantur.

3. Probabiliter propter hos successus Joannes Daza, qui illo tempore erat Rector paroecialis Sancti Petri de Linares, in cuius territorio Sanctuarium Confraternitatis situm erat, controversiam movit de iuribus et fructibus percipiendis et administrandis eiusdem Sanctuarii, quippe cum praeterea ministri functionum cultus divini Sanctuarii sacerdotes essent monachi monasterii Sti. Spiritus, in eodem territorio existentis, et multa matrimonia atque funera in Sanctuario celebrarentur.

Confratres affirmarunt «Ermitam» non partem beneficialis paroecialis, sed ecclesiam restauratam et amplificatam iam in dominio esse Confraternitatis, quapropter se dicto paroco nihil debere.

In processu anno 1523 coram auctoritate ecclesiastica dioecesana Abulensi celebrato iudex officialis ecclesiasticus Confraternitati attribuit omnes proventus et negavit Rectori paroeciae Sti. Petri quaelibet iura. In concordia deinceps facta statutum est, a confratribus quotannis dandum esse paroco unum aureum, ut ipsi sese ab omni petitione in posterum liberarent.

do que lo referente al nombramiento del Rector y Capellanes del Santuario y a la administración de sus bienes se debe regir por las normas comunes del CIC. Los restantes privilegios, lógicamente, siguen vigentes: la unidad del dominio de los bienes del Santuario y de la Cofradía encomendado a la Cofradía, y la unidad de administración también encomendada a la Cofradía ' quatenus generatim dominus bonorum etiam eorum administrationem secumfert' (n. 23). Varias consecuencias cabe sacar de esta decisión de la que omitimos un más extenso comentario tanto por la claridad del «in iure» como por la brevedad de esta nota. La principal creo que es ésta: hay que acomodar, ciertamente, las instituciones canónicas al actual momento social y eclesial. Pero ello debe hacerse no de manera unilateral ni uniforme sino examinando el estatuto canónico de cada una de ellas, respetando sus derechos o privilegios adquiridos, solicitando —si procede— su revocación a la autoridad competente, y viendo cuál es la solución más correcta. El actual CIC puede ser una buena ocasión para proceder a esta revisión.

4. Ne huiusmodi controversia renasci posset, clericus quidam Abulensis, Magister Andreas Carillo, notarius et familiaris Summi Pontificis, qui in ipsa Bulla de qua statim dicendum, etiam «cubicularius de numero participantium et continuus noster commensalis» vocatur, a S. Pontifice Clemente VII petivit, ut sententiam iudicis Abulensis confirmaret et Heremitorium et Hospitale invicem perpetuo uniret, adnecteret et incorporaret atque, hac occasione nacta, alia opportune provideret.

Summus Pontifex de facto petitioni annuit propter suum, ut dixit, officium sive cultum divinum in locis praesertim gloriosae semperque Virgini Mariae dicatis sive opera pietatis et caritatis, praesertim erga pauperes et alias miserabiles personas, fovendi. Die ergo 22 maii anni 1526 Bullam edidit, quae Chartam Magnam Confraternitatis B.M.V. de Sonsoles constituit.

5. Bulla dirigitur ad Abbatem monasterii Sti. Spiritus, ad Priorem qui gubernabat monasteria S.M. de Monte Carmelo in civitate Abulensi sita necnon ad Archidiaconum de Arévalo Ecclesiae Abulensis qui fuerat Iudex officialis ecclesiasticus in controversia inter confratres et Rectorem Ioannem Daza dirimenda, quique sententia sua firmavit concordiam, cuius confirmatio a Summo Pontifice petita erat.

Iuxta enarrationem et mentem historiographorum Sanctuarii hoc actu Abbas monasterii Sti. Spiritus, Prior Carmeli Abulensis et Archidiaconus de Arévalo Abulensis (Cristóbal de Medina?), qui erat etiam iudex apostolicus, nominabantur «iudices conservatorii» i.e. defensores privilegiorum dictae Confraternitatis, de quibus in Bulla disponebatur, quare haec Bulla etiam «conservatoria» vocabatur.

Bulla ipsa duabus componitur partibus. Prima pars continet expositionem concordiae Abulensis supradictae inter Confraternitatem et Rectorem Ioannem Daza, qua enarratur discordia inter partes et concordia obtenta. Summus Pontifex hanc causam ad se vocat et litem penitus exstinguit propriis suis dispositionibus, quae secundam partem Bullae constituunt.

In hac secunda parte, Summus Pontifex ante omnia sententiam concordiae auctoritate apostolica approbat et confirmat, supplens omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsitan in ipsa intervenerint. Deinde disponit perpetuam unionem, annexionem, incorporationem Heremitorii et Hospitalis cum omnibus eorum bonis et proventibus, eorum dispositionem et administrationem necnon regimen et gubernium per duos Patronos et duos Deputatos eiusdem Confraternitatis exercendum, Episcopi dioecesani vel cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita.

Deinde Summus Pontifex facultatem tribuit Patronis et Deputatis Confraternitatis statuta, licita tamen et honesta et sacris canonibus non contraria, condendi, mutandi, corrigendi, alterandi et in totum delendi in omnibus quae regimen, tranquillum statum Hospitalis et Heremitorii, cultum, fructuum, elemosynarum et oblationum distributionem, Patronorum et Deputatorum praedictorum electionem, modum decentiorem Missas et Divina Officia celebrandi concernunt. Haec omnia Apostolica Auctoritate confirmata censeantur.

Summus Pontifex insuper obligationes perpetuas statuit Confraternitati impositas, i.e. ut Heremitorium ipsum in suis structuris et aedificiis debite reparetur, librisque, calicibus, paramentis et ornamentis divino cultui necessariis muniatur et decoretur. Indulgentiae denique christifidelibus conceduntur, ut eo libentius devotionis causa illuc confluant et erga illius subsidium, manutentionem et decorem, necnon

dicti Hospitalis pauperum sustentationem, eo promptius se liberales exhibeant quo ex hoc pro temporalibus bonis, quae contulerint, proemia Regni Coelestis se adipisci posse cognoverint; quibus indulgentiis nullae aliae concessionones huiusmodi quaecumque praeiudicium afferre possunt.

Ne stabilitas et perpetuitas huius Instituti pietatis et caritatis in discrimen vocetur Pontifex deinde stricte prohibet et nullam declarat quamcumque detractionem bonorum et reddituum Confraternitatis ad alia Instituta, beneficia, opera condenda. Subtrahit in fine omnibus iudicibus et Commissariis, etiam Apostolicis, causarum Palatii Apostolici Auditoribus et S.R.E. Cardinalibus non exclusis, quamvis facultatem iudicandi et interpretandi aliter has dispositiones, sub poena nullitatis, easque salvas vult contra omnes alias dispositiones.

6. Hac suprema et benignissima provisione Summi Pontificis Clementis VII sortibus Confraternitatis et Sanctuarii Abulensis B.M.V. de Sonsoles consolidatis, solemnem possessio Sanctuarii ex parte ipsius Confraternitatis anno sequenti, i.e. primo die mensis maii 1527, capta est. Narrat A. de Cianca hoc modo occupationem sollemnem Sanctuarii factam esse: «Coram fratribus et Patronis Confraternitatis Ioannes Davila, Notarius episcopalis et civilis, Deputatis Confraternitatis eam praesentantibus ecclesiam cum omnibus possessionibus adnexis commisit, qui in signum captae possessionis intrantes ecclesiam, portam eius clausurunt, in ea deambulaverunt, et aqua benedicta eam consperserunt atque evangelium cantabant». Itaque pacifice et absque ulla contradictione possessionem ceperunt, de qua capta possessione actus notarialis dicti notarii in archivo Confraternitatis conservatur.

7. Paucis annis post Bullam latam, processus instituebatur a Commissariis taxarum cruciatarum contra Confraternitatem, a qua solutionem pecuniae postulaverunt secundum ius vicens Bullae cruciatae. Tunc Superiores Confraternitatis responderunt se esse exemptos a solutione huius taxae ex tenore Bullae Clementis VII in favorem Sanctuarii. Hac occasione ipsum Bullae documentum originale in medium proferebatur, scriptum lingua latina et sigillo plumbeo munitum et datum Kalendis iunii anni millesimi quingentesimi vigesimi sexti et anno tertio Pontificatus. Ex qua Bulla clare patuit totalis exemptio a talibus taxis, quare Commissarii Sanctae Cruciatuae sententiam tulerunt declarantem Ermitam et Confraternitatem de facto omnino exemptas esse; quod a publicis Notariis confirmatum est. Hanc sententiam anni 1531 sequenti anno altera secuta est eiusdem tenoris, quare in posterum nulla amplius de his solutionibus quaestio oriebatur.

8. Saeculis sequentibus possessiones et iura Sanctuarii et Confraternitatis pacifice agnoscebantur et talis opinio communis ab historiographo Bartholomaeo Fernandez de Valencia claris et concinnis verbis exprimitur scribente: «Ratio unionis et incorporationis Hermitae et Hospitalis erat quod sic securius conservarentur et quod ita Sanctuarium non dividebatur a Confraternitate, etiam speciali casu quo quis volebat id occupari a Monasterio quodam vel alio instituto regulari aut beneficio ecclesiastico. Insuper ita provisum erat quod Confraternitas hoc facto vel aliis futuris, quae timenda erant, non poterat dismembrari neque hac de causa devotio magna quae ex dicta Bulla tunc temporis existens elucet, minueretur vel deficeret. Quapropter eadem Bulla ad stabilitatem utriusque i.e. Sanctuarii et Confraternitatis eidem ipsi

concessum est ius plenum et absolutum patronatus Hermitae et Hospitalis cum facultate mutandi statuta et regendi atque administrandi eorum bona et proventus».

Ipsa auctoritas ecclesiastica Abulensis de facto agnovit semper privilegia Bullae Clementinae sive Statuta confirmando sive iura servando.

9. Anno tamen 1981, die 14 septembris, Episcopus Abulensis decretum tulit quo iuxta ius commune vigens Rectorem nominavit Sanctuarii B.M.V. de Sonsoles et divisionem bonorum Sanctuarii ipsius et Confraternitatis B.M.V. de Sonsoles statuit, ita ut distinctam administrationem haberent, exercendam respective a Rectore Sanctuarii et a rectoribus seu delegatis Confraternitatis vel Patronatus. Hunc in finem Commissio mixta ex delegatis utriusque Instituti studere debuit modum separationis bonorum, ita ut intra terminum primae diei ianuarii anni 1982 iam libri distinctae administrationis haberentur.

10. Confraternitas recursibus ad varia tribunalia ecclesiastica et civilia Decretum Episcopi impugnavit et finaliter a Congregatione pro Clericis petiit, ut dictum Decretum Episcopi Abulensis nullum declararet, quia iuribus et privilegiis propriis contrarium.

Congregatio autem die 18 iulii anni 1984 proprio decreto Episcopi Abulensis decretum plene confirmavit.

11. Contra hoc decretum Dicasterii Curiae Romanae die 18 augusti 1984 Teodomirus Martin Gonzales, ut Praeses Patronatus Hermitae et Hospitalis peregrinorum B.M.V. de Sonsoles, recursum instituit coram Sectione altera huius Supremi Tribunalis.

Ne iuribus Confraternitatis, quae erant sub iudice, praeiudicium afferretur, a parte recurrente quaesitum est, ut executio Decreti Congregationis pro Clericis suspenderetur.

Hoc Supremum Tribunal, petitione partis recurrentis acquiescens, die 14 februarii anni 1985 decrevit executionis decreti Congregationis pro Clericis suspensionem et, recursum partis resistentis contra hanc suspensionem reiiciens, eandem die 1 martii eiusdem anni confirmavit.

Haec dein Signatura Apostolica die 13 decembris in Congressu coram Em.mo Cardinali Praefecto habito, decrevit: «1.º: recursum Confraternitatis Abulensis admittendum esse ad disceptationem coram Patribus Cardinalibus, et 2.º: standum esse Decreto huius Supremi Tribunalis diei 14 februarii anni 1985 quo decreta erat suspensio executionis Decreti impugnati».

Die tandem 10 ianuarii anni 1986 coram omnibus secundum ius praesentibus rite concordatum est dubium: «An constet de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Clericis diei 18 iulii anni 1984, quatenus eadem decisio confirmat Decretum Exc.mi Episcopi Abulensis diei 14 septembris 1981».

12. Quapropter hodie nobis huic dubio respondendum est.

II. IN IURE

13. Quamvis associationes fidelium iam a primis saeculis vitae Ecclesiae existant, Confraternitates sensu proprio solummodo a saec. XIII habentur et deinceps

in Ecclesia divulgantur et indoles conditionesque internae determinantur. Quaedam praesertim de iure vigilantiae et visitationis ex parte Ordinariorum locorum, etiam a Concilio Tridentino (Sessio XXII, cann. 8 et 9 de ref.) statuuntur. Normarum tamen varietas circa Confraternitates ad unitatem reducit per Constitutionem «Quaecumque», die 7 mensis decembris anni 1604 a Clemente Papa VIII circa Confraternitates latam, in qua essentialia condiciones communes enumerantur, quod scilicet, praesertim ad cultum divinum et secundarie etiam ad opera caritatis christianae exercenda, etiam inter laicos sed semper in locis cultus publici i.e. in ecclesiis aut sanctuariis, ab auctoritate ecclesiastica dioecesana constitui possunt. Iuxta hanc Constitutionem una tantum eiusdem finis in eadem ecclesia erigi potest et ab alia sufficienter remota. Ad Ordinarium loci spectat vigilantia quoad activitatem cultus et quoad administrationem bonorum Confraternitatis, quia eius bona sunt bona ecclesiastica, eo ipso quod ex erectione ecclesiastica Confraternitates personae morales in Ecclesia fiunt. Ex his omnibus ius visitationis confraternitatum ex parte auctoritatis ecclesiasticae emanat.

Alia circa admissionem membrorum, regimen internum, habitum proprium et insignia, circa relationem cum paroco et functionibus paroecialibus, circa favores spirituales et indulgentias postea a Dicasteriis Curiae Romanae et ab ipsis Summis Pontificibus melius determinantur, quae omnia in ius de confraternitatibus Codicis Iuris Canonicae anno 1917 editi confluerunt.

Quod rem nostram ius Codicis anni 1917 in memoriam revocatur: 1.º confraternitates ab auctoritate ecclesiastica non nisi per formale erectionis decretum constitui possunt (c. 708); 2.º Confraternitates in propriis ecclesiis erectae, functiones non paroeciales independenter a paroco exercere possunt (c. 716, §1); 3.º in ecclesiis non suis proprias functiones ecclesiasticas in sacello tantum vel altari, in quibus sunt erectae, exercere possunt (c. 717, §1); 4.º patrimonium confraternitatis, quae erecta sit in ecclesia non sua, debet esse separatum a bonis fabricae vel communitatis (c. 717, §2); ideoque in ecclesia sua haec duo patrimonia non sunt vel non debent esse separata.

14. Cum fundamentalis quaestio in nostro dubio solvendo relatio sit inter ius commune, a parte resistente invocatum, et ius speciale seu privilegium Pontificium, a parte recurrente prolatum, videndum est ante omnia quaenam sit vis privilegiorum relate ad ius commune.

Codex anni 1917, vigens tempore quo decretum Episcopi Abulensis diei 14 septembris 1981 latum est, haec statuit: privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur (c. 70); privilegium cessat per revocationem competentis auctoritatis (c. 71, coll. cum. 60), quae est auctoritas concedens aut eius superior aut eius delegatus, item privilegio concesso alicui personae iuridicae ratione dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare nequeunt (c. 72, §3); si temporis progressu rerum adiuncta ita, iudicio competentis auctoritatis, immutata sint, ut noxium evaserit aut eius usus illicitus fiat, cessat privilegium (c. 77). Evidens est quod iuxta eundem Codicem in casu privilegii Pontificii ad solum Pontificem huiusmodi iudicium ideoque privilegii cessationis declaratio spectat (c. 78) (cf. in novo Codice cc. 78, §1; 80, §3; 83, §2; 84).

15. Existentia privilegii rite comprobari debet. Cum autem de antiquis praesertim privilegiis certitudo authenticitatis et integritatis non semper absque ullo dubio obtineri possit, a Codice statutum est quod *possessio centenaria vel immemo-*

rabilis praesumptionem inducit concessi privilegii (c. 63, §2, Codicis anni 1917 et 76, §2 Codicis anni 1983), quae praesumptio, a lege statuta (c. 1584), onus probandi contrarium imponi ei, qui privilegium negat (c. 1585). Haec norma specialis de privilegiorum tutela illa generali norma Codicis Iuris Canonici innititur, iuxta qua, «iura quaesita itemque privilegia quae, ab Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur» (c. 4).

16. Quae debet nunc: *estne privilegium de quo in casu, postea legitime abrogatum aut ei aliquo modo derogatur?*

a) Primo dicendum est quod abrogatio vel derogatio dicti privilegii, a Summo Pontifice concessi, solummodo per ipsum vel ab eius delegatis necnon per Concilia oecumenica fieri potuit. Nunc autem in nostra re habemus explicitam abrogationem privilegiorum omnium, etiam confraternitatibus concessorum, per Concilium Tridentinum factam in omnibus, quae eas a visitatione et a reddenda ratione de uso et administratione bonorum ab Ordinario loci eximebant (Sess. XXII, cc. 8 et 9 de ref. collato cum c. 17 Concilii Viennensis, qui providet de tutela, conservatione et recto usu bonorum omnium piarum foundationum laicis et clericis saecularibus concreditorum). Contra omnia ergo huiusmodi iura Ordinarii loci nulla exemptio ratione privilegii Pontificii a confraternitatibus invocari potest.

b) De aliis concessionibus in privilegio Clementino, contentis quaeri potest, utrum quaedam abrogatio aut derogatio habeatur? Utrum scl. Rectores et Cappellani ecclesiae confraternitatum nominari aut saltem praesentari possint, ita ut Ordinario loci solummodo remaneat ius institutionis aut confirmationis? Decretum «Cristus Dominus» Concilii Vaticani II, in n. 28, de hac re expresse statuit: «Episcopum necessaria libertate gaudere debere in officiis et beneficiis conferendis: suppressis proinde iuribus seu privilegiis quae eandem libertatem quoquo modo coarctent». In Litteris Apostolicis autem «Ecclesiae Sanctae», motu proprio a Summo Pontifice Paulo VI die 6 mensis augusti anno 1966 datis, quibus normae ad quaedam exsequenda Sancti Concilii Vaticani II decreta statuuntur, sub n. 18, quo iurium et privilegiorum in conferendis officiis et beneficiis suppressio disponitur, affirmatur «privilegia non onerosa, personis physicis vel moralibus hucusque forte concessa, quae ius electionis, nominationis vel praesentationis pro quocumque officio vel beneficio non concistoriali vacante secumferunt, abrogantur». Excipiuntur ergo et sustinentur solummodo privilegia onerosa, quae vigere pergunt. Si ergo privilegia huiusmodi confraternitatibus concessa onerosa sunt, sustinentur iuxta tenorem harum normarum, i.e. datur electio aut praesentatio ex parte confraternitatis; institutio aut confirmatio tamen spectat ad Ordinarium loci.

17. Animadvertendum est novum Codicem statuere quod Rector Ecclesiae, quae non sit paroecialis nec capitularis nec adnexa domui communitatis religiosae aut societatis apostolicae, libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est Rectorem confirmare vel instituere (cc. 556, 557, §1; cf. c. 157).

De Cappellanis, pariter, quibus stabili modo committitur cura pastoralis, saltem ex parte, his in ecclesiis in eodem Codice vigenti statuitur eos nominari ab Ordina-

rio loci, nisi iure aliud caveatur aut cuidem specialia iura legitime competant, quo in casu ad Ordinarium loci pertinet praesentatum instituere aut electum confirmare (cc. 564, 565, 317, §1).

Item ex eodem iure novo clarum est quod loci Ordinarius Rectorem et Cappellanos, etiam a confraternitate electos aut praesentatos, ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest (cc. 563 et 572).

18. Alia quaestio vertitur de divisione bonorum alicuius ecclesiae et Confraternitatis.

Hac de re dicendum Codicem hodie vigentem de christifidelium consociationibus in genere tantum normas constituere, sive de publicis sive de privatis (cann. 298-329), Codicem Pio-Benedictinum, e contra, de singulis speciebus harum consociationum normas dedisse. Quare statuit huiusmodi separationem solummodo necessariam esse respectu bonorum fabricae ecclesiae non suae et bonorum propriorum confraternitatis (c. 717, §2 supra citatus).

Quoad administrationem bonorum confraternitatis et Sanctuarii in quo erecta est in memoriam revocare iuvat ea quae iam supra diximus: administratio spectat ad dominum (iuxta c. 319) cum iure vigilantiae ex parte Ordinari loci, cui ergo ratio reddenda est, revocato, inde a Concilio Tridentino, quolibet privilegio exemptionis.

Quaestio de Commissione mixta, sive pro divisione bonorum instituenda sive pro administratione utriusque massae bonorum, secundum hucusque dicta diiudicanda est.

III. IN FACTO

19. Ante omnia affirmandum est quod existentia et valor praefatae Bullae Pontificiae diei 22 maii 1526 negari non potest. Quamvis enim documentum originale vel eius registratio in Archivo Confraternitatis et in Archivo Vaticano non amplius existat vel inveniri potuerit, praesumptio concessi privilegii, a c. 63, §2 Codicis anni 1917 statuta (cf. c. 76, §2 novi Codicis), etiam a pluribus argumentis historicis confirmatur: persona impretrantis i.e. Magister Andreas Carillo, Notarius et familiaris Summi Pontificis concedentis, aliis concessionibus confirmatur, quae a Pontifice ei datae sunt et quarum documenta adhuc in Archivo Vaticano exstant. Ipsum falsarium fuisse omnino excluditur etiam quia authenticitas Bullae ab expertis iudicibus taxarum cruciatae, quibus a Confraternitate ipsa Bulla originalis duabus vicibus, paucis annis post eius concessionem, ad vindicandam exemptionem a talibus taxis exhibita erat, plene agnita est. Falsitas absque dubio ab istis expertis iudicibus detecta et ab auctoritate Romana concedente confirmata esset, si Bulla falsa fuisset.

De facto autem numquam in dubium vocata, quinimmo per plus quam quattuor saecula pacifice ab omnibus etiam ipsis Episcopis Abulensibus agnita est.

Valor ergo Bullae Clementinae saltem ratione praesumptionis a canone 63, §2 veteris Codicis (cf. c. 76, §2 novi Codicis) statutae agnosci debet.

20. *In procedendo*: Privilegium igitur Clementinum Confraternitatis agnosci debet, saltem quoad omnia quae non sunt postea abrogata vel quibus non est legitime derogatum.

Quod tamen non fecit Episcopus Abulensis, qui in suo Decreto, a Confraternitate impugnato, ex iure tantum communi argumenta adducens, nulam rationem iuris specialis Bullae habet.

Congregatio pro Clericis, Decretum Episcopi Abulensis plane confirmans, mentionem quidem fecit in proprio Decreto Bullae eiusque iuris specialis: sed nullam rationem eius habet in decernendo, statuens quaedam, quae privilegio Bullae contraria sunt.

Hac de causa Congregatio pro Clericis certe legem hanc specialem adhuc vigentem in procedendo violavit, quare, saltem ex hoc capite concludimus: *affirmative respondendum esse dubio proposito*. Ex alio capite non videtur eam legem communem in procedendo violasse quatenus scilicet ipsa, ut advocatus partis recurrentis affirmat, argumenta huius partis ignoraverit aut ei facultatem non dederit propria documenta et argumenta exhibendi.

21. *In decernendo*: Nunc autem ea quae secundam partem dubii propositi spectant, utrum scilicet Congregatio violaverit legem in decernendo, per partes enucleanda sunt.

22. Imprimis agendum est de imposita separatione bonorum Sanctuarii et Confraternitatis seu Patronatus.

Ex supra enarrata Specie facti deducitur Confraternitatem B.M.V. de Sonsoles ab auctoritate ecclesiastica competenti dioecesana rite erectam esse in parvo et rudi sacello ex parte collapse, ideoque statim personalitatem iuridicam ecclesiasticam adeptam esse. Confratres deinde et statim, oblationibus et donationibus acceptis, non solum terras circumiacentes emerunt, sed etiam sacellum quoque reaedificaverunt et deinde in ecclesiam transformaverunt eamque amplificaverunt necnon necessariis aedibus ornaverunt.

Dicendum ergo proprietatem sacelli originalis — nisi momento erectionis Confraternitatis eidem donatum sit quod probabile est — a novis aedibus, quae inde ab initio bona erant propria Confraternitatis absorptam esse. Novum ergo Sanctuarium B.M.V. de Sonsoles unam proprietatem constituit ad Confraternitatem pertinentem.

Nosocomium deinde pro peregrinis et pauperibus penes Sanctuarium aedificatum distinctum quidem dominium effecit, quod tamen etiam ad Confraternitatem pertinebat, ab ea administrabatur eiusque curae concreditum remanebat.

Variae ergo proprietatis obiecta, sed non diversi domini distingui possunt, sed unicum est Sanctuarium quod ad Confraternitatem pertinet et aliae proprietates distinctae, praesertim Hospitium, quae tamen etiam ad eandem Confraternitatem pertinent.

Rationibus supra in Facti specie explicatis, i.e. ut per stabilem unionem omnium bonorum horum duorum institutorum stabilitas ipsa operum cultus Marialis et caritatis christianae iam inter se conexorum in tuto collocaretur, Bulla Pontificia Cle-

mentis VII impetrata atque concessa est, qua praeprimis omnia huiusmodi bona et etiam proventus et onera «*perpetuo unita, annexa et incorporata*» sunt. Quo factum est, ut bona ecclesiae propria et bona Confraternitatis in ea erectae iam ante litteram Codicis Pio-Benedictini (c. 717, §2) non separata sed expresse unita sint.

Haec dispositio Bullae Clementinae, quae Confraternitatis rationem vitae principalem constituit, *numquam revocata aut abrogata est ideoque hucusque viget*. Contra hoc ius ergo Decretum Congregationis pro Clericis confirmavit Decretum Episcopi Abulensis statuentis separationem bonorum Sanctuarii et Confraternitatis.

Hac dispositione Congregatio pro Clericis —sicut Episcopus Abulensis— *separat quod Summus Pontifex coniunxit*, idque absque mandato speciali Pontificio; et insuper rationem essentialem Bullae ipsius negavit.

Circa hanc partem dubii ergo respondendum est: affirmative seu Decretum Congregationis pro Clericis legem violasse.

23. Videndum deín est de dispositione Decreti Congregationis pro Clericis, Decretum Episcopi Abulensis confirmantis, qua administratio bonorum Sanctuarii ab administratione bonorum Confraternitatis separatur et administrationibus utriusque instituti propriis attribuitur.

Responsio circa hanc partem dubii conecitur, ut patet, cum praedictis, quatenus generatim dominium bonorum etiam eorum administrationem secumfert.

Hac in re ius speciale Bullae Clementinae, quae administrationem massae bonorum Confraternitatis B.M.V. de Sonsoles eius Rectoribus attribuit non differt a iure communi etiam vigenti (c. 319), quod statuit associationem publicam in Ecclesia bona quae possidet etiam administrare iuxta propria Statuta. Differt tamen exemptione, quam privilegium Bullae Confraternitati attribuit, a directione scl. auctoritatis ecclesiasticae competentis i.e. in casu Ordinarii loci.

Haec enim exemptio abrogata est per Concilium Tridentinum ut supra in parte de iure memoravimus. In urgenda enim facultate Ordinarios locorum quoad usum et administrationem bonorum piarum foundationum ecclesiarum (iuxta mentem c. 17 Concilii Viennensis), inter quae Confraternitates expresse nominantur, quaeque facultas consistit *in visitatione, vigilantia, ratione reddenda* eidem Ordinario loci, *explicite abrogantur omnia privilegia (non obstantibus quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto*»; Sessio XXII, c. 8 de ref.).

Decretum ergo Congregationis pro Clericis in Causa Abulensi editum, *statuens administratione et administratores separatos* pro bonis Sanctuarii et Confraternitatis, *violavit* non solum legem specialem Bullae sed etiam ius vigens commune-supposita violatione legis in separatione bonorum Sanctuarii et Confraternitatis patrata, ut supra sub n. 1.º demonstratur.

Sed non violavit legem submitiendo visitationi et vigilantiae Ordinarii loci usum et administrationem bonorum Confraternitatis.

24. Decretum Congregationis pro Clericis, quo confirmata est institutio *Commissionis mixtae* ab Episcopo Abulensi statuta, quae in actum deducat separationem bonorum Sanctuarii et Confraternitatis eorumque administrationem respectivis

administratoribus distinctis committendo, logice etiam legem specialem i.e. privilegium Pontificium adhuc vigens violavit, nisi etiam ius vigens commune.

25. Remanet dubium examinandum de parte Decreti Congregationis pro Clericis, qua Ordinario loci Abulensi facultas attribuitur nominandi Rectorem atque Cappellanos Sanctuarii B.M.V. de Sonsoles proprio nutu, absque quolibet iure electionis vel praesentationis ex parte Confraternitatis faciendae.

Secundum ea quae supra in parte de iure diximus, quaestio est videre, utrum privilegium Bullae Clementinae quod Confraternitati electionem vel praesentationem Rectoris et Cappellanorum attribuit, sustineatur aut abrogatum sit. *Responsio erit affirmativa i.e. pro valore privilegii, si istud onerosum est, quia tantum privilegia onerosa a recenti legislatione communi* hac in materia sustinentur, ut supra in parte de iure vidimus.

Ex historia Confraternitatis, ex eius activitate, sed praesertim ex ipso textu Bullae Clementinae *luce clarius apparet, onera sustinenda rationem eius existentiae constituisse* et dispositiones Pontificiae ac privilegia hunc in finem i.e. ad haec onera sustinenda data esse: ad sustentationem et reparationem materialem aedium ad cultum marialem fovendum ad opera caritatis mediante hospitio et nosocomio in favorem pauperum et peregrinorum exercenda. Summus Pontifex ipse loquitur expresse de «oneribus» consuetis quae congrue supportentur.

De facto huiusmodi obligationes et onera, mediantibus bonis et proventibus concessis adimplenda, decursu saeculorum fideliter a Confraternitate servata sunt, quod libri accepti ex expensi ab administratoribus ordinati, etiam recentissimi, et ratio singulis annis composita absque ullo dubio demonstrant, ubi inter onera principaliora *indicantur expensae factae pro reparatione aedificiorum pro remuneratione operum et servitorum, pro ornamentis et cultu*. In ratione exhibita pro anno 1974 etiam lacuna (deficit) accepti contra expensas factas comprobatur. Dubitari ergo non debet, quin privilegium Bullae Clementinae onerosum sit; quapropter in Rectore et Cappellanis Confraternitatis deputandis privilegium sustinetur hodie quoque.

Hac ratione Decretum Congregationis *de libera nominatione ex parte Episcopi legem specialem violavit*.

26. Quod hanc ultimam quaestionem atque quoad alias supra tractatas maximi est momenti revocare dispositionem iuris specialis Bullae circa Statuta Confraternitatis. Pluries, sicut Bulla praevidet, mutata sunt temporibus praeteritis et in hac mutatione ratio habita est etiam, quod ipsum privilegium Pontificium postulat, sacrorum canonum.

Ideo explicatur saepius mutata forma regiminis interni, ipsis Patronis et Deputatis disponentibus, usque ad Statuta recentia, anno 1969 approbata. Ex omnibus his Statutis, ceterum, patet falsam esse illationem advocati partis resistentis, que affirmat Patronos et Deputatos, de quibus Bulla loquitur, auctoritates distinctas esse a Confraternitate et a collegio fratrum.

Sed etiam explicantur dispositiones in Statutis insertae, iuxta quas Confraternitas ius vigilantiae, visitationis et examinis administrationis atque ius nominationis et confirmationis Rectoris et Cappellani post electionem et praesentationem ex

parte Confraternitatis Ordinario loci agnoscit, necnon Statuta mutata eius iudicio et approbationi submittit, *quod ex variis Statutis* (quae in Actis exhibentur) *elucet*.

27. Notari potest quod Ordinarii loci dioecesis Abulensis per saecula non solum non impugnaverunt Confraternitatem eiusque privilegia, sed expresse ac auctoritate propria recensiones varias Statutorum approbaverunt. *Novissima Statuta, ad normas Concilii Vaticani II accomodata, die 30 ianuarii anni 1969* approbata sunt. Si privilegium Confraternitatis revera noxium evaserit, ideoque eius usus illicitus, recursus ad Congregationem pro Clericis *ocasio erat optima petendi a Summo Pontifice* declarationem cessationis vel Summum Pontificem monendi de gravi abusu (c. 84) privilegii a suo praedecessore Clemente VII concessi. Aut saltem in Decreto Congregationis diversimodo disponendum erat, statuendo quae ratione antiqui privilegii ex parte Confraternitatis adhuc sustineri poterant, quaeque autem hodie ratione legitimae derogationis ad Ordinarium loci spectant.

28. Quidquid est: Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal de merito pastoralis causae iudicare non potest, sed tantum videre debet *de conformitate vel minus* Decreti Congregationis pro Clericis Decretum Episcopi Abulensis conformantis cum lege *sive in procedendo sive in decernendo*.

29. Quibus omnibus, tum in iure tum in facto mature perpensis, Collegium Em.morum Patrum Cardinalium, pro Tribunali sedens ac solum Deum prae oculis habens, Christi nomine invocato, circa propositum dubium respondendum censuit uti respondet: «*Affirmative, seu constare de violatione legis sive in procedendo sive in decernendo*».

(Sign.ti) Achilles Card. Silvestrini, Praefectus
 Bernardinus Card. Gantin
 Petrus Card. Palazzini
 Opilius Card. Rossi
 Aloisius Card. Dadaglio
 L + S D. Simon Card. Lourdasamy
 Eduardus Card. Gagnon
 Alfonsus Card. Stickler, Ponens

ET NOTIFICETUR

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 29 septembris 1989

+Zenon Grocholewski, Secr.
 Vincentius Cárcel Ortí, Canc.

ANEXO I

Obispo de Avila, «Decreto: nombramiento de Rector del Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles y separación entre los bienes del Santuario y los de la Cofradía de Nuestra Señora de Sonsoles», 14 de septiembre de 1981 (*BOO Avila*, 72 (1981) 294-95).

Después de detenido estudio de la situación canónica del SANTUARIO DIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES, en el término municipal y extramuros de la Ciudad de Avila, visto que corresponde al Ordinario el libre nombramiento del Rector de esta Iglesia, no parroquial ni conventual, por no constar la existencia de derecho de elección o presentación a favor de alguna persona física o moral; en uso de las facultades que nos corresponden, a tenor del canon, 480, 1.º del Código de Derecho Canónico vigente, hemos determinado proceder, y por el presente procedemos a:

1. Nombrar Rector del SANTUARIO DIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES, al Presbítero don Tomás Sobrino Chomón, con las funciones y facultades que señala el Derecho Canónico en los cc. 479-486.

2. Establecer la separación entre los bienes pertenecientes al Santuario y los pertenecientes a la Cofradía o Patronato de Nuestra Señora de Sonsoles; de modo que sean administrados separadamente, a tenor del canon 717, 2.º del CIC: por el Rector del Santuario los de éste (c. 485), y por la Cofradía o Patronato los que a ella corresponden, salvas siempre las prescripciones del mismo Derecho Canónico a este respecto (cc. 1521-1528).

A tal fin, se designa una Comisión del Obispado, que junto con la Directiva de la Cofradía estudiará el modo de llevar a cabo esta separación de bienes; de tal manera que, a más tardar, el día 1.º de enero de 1982 se abran los libros y contabilidades correspondientes, por separado.

Sin que obste nada en contrario.

Dado en Avila, a catorce de septiembre de mil novecientos ochenta y uno.

ANEXO II

(*BOO Avila*, 75 [1984] 330-35).

SACRA CONGREGATIO
PRO CLERICIS

Prot. 173949/III

Romae, 18 de julio de 1984

DECRETO

El Presidente del Patronato de Nuestra Señora de Sonsoles, Patrona de la Diócesis de Avila en España, envía por correo certificado, el día 16 de noviembre de 1983, al Obispado de Avila el recurso, que debe ser presentado a esta Sagrada Congregación contra el Decreto del Ordinario diocesano del día 14 de septiembre de 1981.

Con este Decreto el Ordinario del lugar, en virtud de las facultades que le concede el Derecho Canónico, nombra Rector del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Sonsoles, y establece la separación entre los bienes pertenecientes al Santuario y los pertenecientes a la Cofradía o Patronato de Nuestra Señora de Sonsoles.

El Presidente del Patronato, no habiendo tenido éxito su súplica de reposición del Decreto por parte del Ordinario, se dirigió, en sucesivas instancias, al Tribunal Metropolitano de Valladolid, primero, y después al Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, pidiendo la suspensión del mencionado Decreto. Sin embargo, ambos Tribunales se declararon incompetentes.

El Vice-Presidente del Patronato urgió después, ante el Juez-Ordinario de la Diócesis de Avila, la recuperación de la Ermita-Santuario, pacíficamente, según él, poseída por el Patronato y ahora, a partir del Decreto, ocupada por sacerdotes de nuevo nombramiento. El Tribunal eclesiástico de Avila también se declaró incompetente, y su decisión fue ratificada por el Tribunal Metropolitano de Valladolid.

Los recurrentes, de modo insólito, acuden a la Jurisdicción civil, la cual también se declara incompetente, y finalmente la Audiencia declara definitiva la resolución por no haberse seguido en la debida forma la apelación.

Esta Sagrada Congregación acepta el recurso presentado por el Presidente de dicho Patronato contra el Decreto del Ordinario de Avila, y se declara competente, en el caso, por tratarse de un recurso jerárquico contra un acto administrativo pastoral. Y ahora, después de haber estudiado debidamente las actas,

DECRETA

— Al Ordinario Diocesano compete en la Diócesis de Avila, que se la ha confiado, toda potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por derecho o por decreto del Sumo Pontífice se reservan a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica. En este recurso, se hace continua referencia a la Bula «*Hodie a Nobis*», de 22 de mayo de 1526, otorgada por el Papa Clemente VII.

— Esta Bula no erige la Cofradía, ni interviene en el régimen interno de ésta, sino que en cuanto se refiere a la administración del patrimonio de Sonsoles, establece la unión de las masas de bienes del Santuario y Hospital. La Cofradía, pues, como persona moral o jurídica, con sus directivos y con su régimen interno, siempre fue y sigue siendo de derecho diocesano.

— La Cofradía o Hermandad de referencia es el precedente de este Patronato, que tiene finalidad religiosa y no goza de ningún derecho de presentación para algún oficio eclesiástico, sino que, como consta en su Reglamento, bajo la autoridad del Ordinario Diocesano atiende a las actividades del Santuario, el cual es un ente autónomo no personal sujeto a la jurisdicción diocesana y su régimen está totalmente sometido al derecho común.

— El Patronato, en su función representativa de la antedicha Cofradía o Hermandad constituida con la finalidad de dar culto a la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Sonsoles, no es el propietario de los bienes del Santuario, y no es tampoco dueño de la Ermita ni de sus pertenencias. Si el Patronato ha ejercido alguna posesión y administración, éstas han sido realizadas con consentimiento expreso o tácito del Ordinario diocesano.

— La figura del Rector del Santuario, definida en los reglamentos, es nueva a partir del año 1969, y si éste representa al Patronato, está sometido estatutariamente al Ordinario en cuanto representa también a la Jerarquía eclesiástica en la junta de gobierno. Por ello, el nombramiento del Rector del Santuario comporta todos los derechos y obligaciones comprendidos en la legislación canónica y demás disposiciones eclesiásticas, porque compete al Ordinario diocesano proveer por libre colación los oficios eclesiásticos en su propia Iglesia particular, a no ser que el derecho establezca expresamente otra cosa.

— El sacerdote que, antes del nuevo nombramiento de Rector del Santuario hecho por el Ordinario, ejercía las funciones conferidas por el Reglamento, de ahora en adelante podrá continuar desempeñando las funciones que tenía de representar al Patronato, si así lo retiene el Ordinario diocesano, y a modo de asistente eclesiástico o consiliario.

— En cuanto a la separación de bienes entre el Santuario y aquellos pertenecientes a la Cofradía o Patronato de Nuestra Señora de Sonsoles, con inventario y administración separados, decretadas por el Ordinario, sea llevado a cabo por la Comisión Mixta Obispado-Directiva del Patronato, que será constituida por el Ordinario diocesano, con representantes del Obispado y de la Cofradía o Patronato, dentro de un plazo de tiempo que el mismo Ordinario, con su prudencia, podrá determinar. Si una vez agotado el plazo señalado a la Comisión Mixta, no se hubiera llegado a una conclusión por falta de acuerdo, el Ordinario diocesano tratará el asunto con el Colegio de Consultores, con dos párrocos designados con esta finalidad por el consejo prebiteral y con un representante del consejo económico diocesano para poder llegar a una resolución.

— La gestión del patrimonio de Sonsoles, hasta la constitución y funcionamiento de la mencionada Comisión Mixta, será realizada por las mismas personas que lo están haciendo ahora en el día de la fecha de este Decreto, si bien bajo la supervisión periódica del consejo económico diocesano. Y, a partir de la notificación de este Decreto, los bienes destinados al Santuario se han de ingresar, inscribir o registrar a nombre del Santuario Diocesano de Sonsoles, con la firma del Rector del Santuario nombrado por el Ordinario, y con la firma de las personas que lo vengán haciendo, en la actualidad, por parte del Patronato.

— Una vez finalizado el trabajo de la Comisión Mixta, el Ordinario dictará nuevas disposiciones, elaborando, si así lo considera, un estatuto del Santuario en el que se dicten las normas por las que ha de regirse y cómo el Rector del Santuario haya de ser asistido en la administración del patrimonio del mismo por un Consejo en el que participe también una representación de la Cofradía o Patronato de Sonsoles. Igualmente procede que la Cofradía o Patronato elabore unos nuevos Estatutos o Reglamento para adecuarlos a la nueva situación y al Derecho canónico vigente.

— Reconocido el celo de los recurrentes, que han actuado en nombre de la Cofradía o Patronato con el mejor deseo de defender las prerrogativas de la propia institución, siempre proceden, sin embargo, en nombre no sólo de los miembros restantes del Patronato, sino también de todos los devotos de la Virgen Santísima de Sonsoles. Por lo cual, habrán de tratar de superar en el futuro actividades personales que preexistieran o que hubieran surgido con ocasión de los hechos de referencia.

Este Decreto será comunicado al recurrente, y a las personas que el Ordinario diocesano juzgue conveniente, después del fin de la controversia, para lograr la paz en el Señor y el aumento de la devoción a Nuestra Señora de Sonsoles.

Dado en Roma, a 18 de julio de 1984.

Silvio Card. Oddi
Pref.

Maximino Romero
Secr.

ANEXO III

Sacra Congregacione per il Clero
Prot. 189.856/III

Roma, 30 Noviembre 1990

Excelencia Reverendísima:

Con instancia del día 7 de diciembre de 1989, Vuestra Excelencia se dirigía a esta Congregación con el fin de obtener del Santo Padre, *ex gratia*, la abolición de los privilegios concedidos por el Papa Clemente VII, con Bula del 24 de mayo de 1526, a la Cofradía de Nuestra Señora de Sonsoles, relativos a la designación del Rector y de los Capellanes del Santuario y a la propiedad y administración de los bienes.

Es mi deber comunicar ahora a Vuestra Excelencia que el Santo Padre ha acogido en parte la súplica de Vuestra Excelencia, estableciendo cuanto sigue:

1. El Rector y los Capellanes del Santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, de ahora en adelante, serán nombrados libremente por el obispo de Avila, previa consultación con los Dirigentes de la Cofradía.

2. La administración de los bienes del Santuario continuará a permanecer en la Cofradía, pero tanto los bienes cuanto su administración estarán sujetos a la vigilancia del Ordinario del lugar, como los otros bienes eclesiásticos, a norma del derecho común (can. 319, par. 1 y 2; can. 1276, par. 1; can. 1301, par 1 y 2, etc.).

Muchísimo agradecería a Vuestra Excelencia, si tuviese a bien comunicar a la Cofradía de Nuestra Señora de Sonsoles cuanto el Santo Padre se ha dignado establecer para que la misma actúe en consecuencia.

Me es muy grata la circunstancia para saludarle atentamente y subscribirme

de Vuestra Excelencia Reverendísima
devmo.